

Colombia: entre la guerra y la paz

En ningún país de Latinoamérica, y probablemente del mundo, se violan más los derechos humanos que en Colombia.

por José Santamarta

El pasado año murieron violentamente alrededor de 30.000 colombianos, correspondiendo 3.500 muertes a los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército con sus paramilitares. Las conversaciones entre el gobierno conservador de Andrés Pastrana y las FARC crearon nuevas esperanzas de acabar con una guerra que dura ya medio siglo. Hoy las negociaciones siguen, pero pocos confían en que se alcance un acuerdo de paz.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuentan con 15.000 efectivos, el Ejército Nacional de Liberación (ELN) con unos 4.000 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) con unos pocos centenares. La guerrilla no puede ser derrotada militarmente, en un país con tres cordilleras, una geografía endiablada y lleno aún de selvas, pero tampoco puede ganar la guerra y entrar triunfante en Bogotá, a pesar de controlar cerca del 40% del territorio, pues estas zonas en gran parte son bosques amazónicos o páramos, con escasa población y sin otro valor estratégico que el de ser zonas de cultivo de coca y de amapola.

Tarde o temprano habrá que alcanzar un acuerdo de paz, aunque también es posible esperar que la guerra se prolongue otro medio siglo, desangrando y arruinando al país. La guerrilla colombiana es heredera del marxismo leninismo (FARC), del castrismo (ELN) y el maoísmo (EPL), y su discurso es simplista, dogmático y ruralista, en un país urbano, lo que sin duda también ha contribuido a la escasa solidaridad de la opinión pública nacional e internacional con su causa y por la terrible violación de los derechos humanos que sufre la población civil, y muy especialmente los campesinos pobres. Sólo basta con comparar el vasto movimiento de solidaridad que despertó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, o Timor Oriental, con el aislamiento de los grupos guerrilleros colombianos. Lo peor es que tal aislamiento no lo sufren ellos, sino la población civil.

En la última década los aparatos del estado, formales (ejército, policía) o informales (paramilitares y sicarios a sueldo) han asesinado a cerca de 4.000 militantes de la Unión Patriótica, a más de 2.000 diri-

gentes sindicales (en Colombia se asesina cada año a más de la mitad de los sindicalistas muertos en todo el mundo), defensores de los derechos humanos, periodistas, exguerrilleros reinsertados, ecologistas, y a miles de campesinos y trabajadores, ocasionando más de un millón de desplazados internos y cientos de exiliados. Y todo ello manteniendo una apariencia de democracia formal, peor en términos de derechos humanos que la dictadura de Pinochet en Chile.

Hoy es imposible que la guerrilla firme la paz, abandone las armas y se reinserte en la vida civil, pues ello equivaldría a ir directos al matadero. Si se eliminasen los paramilitares, y para ello bastaría que la presión internacional y nacional obligase a actuar a los poderes fácticos de Colombia, el gobierno podría llegar a un acuerdo de paz que propiciase el fin de la guerrilla, como ya sucedió en El Salvador y en Guatemala. El gobierno colombiano no tiene nada que ofrecer a la guerrilla, pues ni siquiera puede garantizar que se respetará la vida de aquellos que abandonen las armas, ni que se pondrá fin a la impunidad de la que gozan los paramilitares, por no hablar de políticas que reduzcan las terribles desigualdades sociales del país.

Realmente donde más seguro se está si uno está amenazado es en el monte con un fusil, pues si algo han demostrado los paramilitares, y el propio ejército, es su cobardía y su inutilidad frente a la guerrilla, que contrasta con la *gallardía* con la que asesinan a civiles desarmados. La guerra enriquece a los altos oficiales, que cobran el doble y ascienden más rápidamente sin arriesgar casi nunca el pellejo (la guerra la libran suboficiales chusqueros y soldados de reemplazo), y a un amplio entramado civil y militar que se va apropiando de las tierras de los campesinos pobres desplazados por el conflicto y se beneficia del narcotráfico.

Los paramilitares

Los paramilitares, como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderados por Carlos Castaño, cuentan con unos 4.500 miembros, dirigi-

dos por militares en ejercicio o retirados, y financiados por terratenientes, grandes empresarios y narcotraficantes. En numerosas ocasiones, cada vez que estaban en peligro por la acción de la guerrilla, el ejército ha venido en su ayuda, y en otras desaparecía misteriosamente para dejarles el camino libre para realizar alguna matanza con total impunidad.

La estrategia de los paramilitares va encaminada a expulsar a la guerrilla de los territorios que tradicionalmente ha controlado y a obtener un reconocimiento que no merecen, pues son sólo el brazo *informal* del Estado para perpetrar todo tipo de desmanes y no tener que dar cuenta ante la opinión pública nacional e internacional. Las ACCU se fogearon a lo largo de los últimos 20 años asesinando a centenares de líderes sindicales, jornaleros y campesinos pobres, primero en el Golfo de Urabá, y posteriormente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, Norte de Santander, Guajira, Córdoba, Meta y Chocó.

Las ACCU/AUC, estrechamente ligadas a grupos legales promovidos por el ejército, como *Convivir* (curioso nombre para las bandas de asesinos), se auto-proclaman como un “movimiento de ciudadanos armados, de carácter antisubversivo que no atenta contra el Estado”, es decir, la versión colombiana de los paramilitares que aterrorizaron Timor Oriental o los clásicos escuadrones de la muerte de países como Guatemala o El Salvador. Los paramilitares son como el GAL en España, pero con la diferencia de que el GAL mató a 28 personas, y los paramilitares han asesinado, tras torturar salvajemente en la mayoría de los casos, a más de 7.000 personas sólo en los últimos cuatro años, casi el doble de los asesinatos cometidos por la dictadura de Pinochet en Chile. Entre sus víctimas figuran ecologistas y defensores de los derechos humanos, como Mario Calderón y Elsa Alvarado, de CINEP, ONG vinculada a los jesuitas y que trabajaba en un proyecto de defensa ambiental en la región de Sumapaz.

Según la organización estadounidense *Human Rights Watch* las guerrillas son responsables del 17% de las víctimas por violaciones de los derechos humanos (homicidios políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones), los Agentes del Estado del 7% y los *paramilitares* del 76%. Los grupos guerrilleros violan indudablemente los derechos humanos, y se financian con secuestros, pero son los llamados paramilitares los responsables de la mayoría de los casos y los que más se ensañan con sus víctimas, habiendo sustituido al Estado en las tareas más *sucias*.

Pero que nadie se llame a engaño, a pesar de que se pretende vender la idea, totalmente refutada por la realidad, de que los paramilitares son independientes del Estado. La matanza de Mapiripán, en el sur del Meta, en donde fueron asesinados 30 campesinos, es un claro ejemplo de la complicidad entre el ejército y los paramilitares, como la que tuvo lugar en Playa Orozco en Magdalena en enero de 1999 (27 personas), y en El

Tigre, cerca de la frontera con Ecuador (30 campesinos), a dónde los paramilitares llegaron en cuatro camiones pertenecientes a la 24 Brigada, y tantas otras. Los paramilitares hacen el trabajo sucio al ejército, asesinando a todo sospechoso de ser de izquierdas o defender los derechos humanos. En 1998 fue desmantelada una unidad entera, la 20 Brigada de Inteligencia, por apoyar y dirigir a los paramilitares, por presión de Estados Unidos.

Ese guardar las apariencias formales, a diferencia de las dictaduras de Argentina y Chile, es lo que explica el éxito del ejército colombiano en la violación de los derechos humanos. Ellos son tan asesinos y torturadores como lo eran sus colegas del Cono Sur, pero siempre han sabido guardar las apariencias democráticas, mientras los gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos miran hacia otro lado y fingen creer que el Estado y la clase empresarial no tiene nada que ver con los paramilitares.

Se habla mucho de narcoguerrilla y del papel que tienen los cultivos ilícitos en la financiación de las FARC, pero a quien realmente beneficia es a los paramilitares y a algunos jefes del ejército. Estados Unidos, aparentemente preocupado por los derechos humanos, no ha realizado ningún esfuerzo serio para presionar al ejército colombiano para que ponga fin a las actividades de los paramilitares. De hecho Colombia ya es el tercero en la lista de países (tras Israel y Egipto) que recibe ayuda militar de EE UU: 289 millones de dólares en 1999. EE UU, que entrena a parte del ejército, al igual que los sucesivos gobiernos colombianos, es culpable, por acción u omisión, de las actividades paramilitares.

¿Qué hacer? Denunciar e informar, y ejercer una gran presión internacional para acabar con la impunidad, supeditando cualquier ayuda económica al respeto de los derechos humanos y cortar cualquier colaboración con el ejército colombiano, aunque para ello hay que denunciar en primer lugar la hipocresía de EE UU.

Desigualdades sociales

La concentración de la riqueza es a la pobreza lo que la impunidad es a la violencia. Colombia es uno de los países con mayores desigualdades sociales del mundo, junto con Brasil y Suráfrica, según el Banco Mundial. El 57% de la población (23 millones de un total de 40) vive bajo la línea de pobreza, y la tendencia tiende a agravarse. El 1,3% de los propietarios posee el 48% de la tierra, y el 20% de los hogares más ricos concentra el 52% del ingreso. En España el 20% de los más ricos tienen 4,4 veces más ingresos que el 20% más pobre, mientras que en Colombia tienen 15,5 veces más, cifra que casi duplica al 8,9% de Estados Unidos, que es uno de los países industrializados con mayores desigualdades, según el *Informe sobre Desarrollo Humano 1999* del PNUD.

Sólo 5 grupos financieros detentan gran parte de la riqueza del país; los grupos Santodomingo y Carlos Ardila poseen el 47% de los medios radiales, y es sólo un

ejemplo de la extrema concentración de la renta, mientras la pobreza, el desempleo y el subempleo afectan a dos tercios de la población. En este contexto la *violación de los derechos humanos*, con su secuela de matanzas, asesinatos selectivos, desapariciones y torturas, por parte de los paramilitares, el ejército y la policía, es el instrumento para mantener bajo control una situación cada vez más degradada. La guerrilla (la opción colectiva) y la delincuencia común (la opción individual) son dos de las manifestaciones de la protesta de los marginados contra un orden que les niega todo, incluso la esperanza.

La guerra de las drogas

El 80% de la cocaína y buena parte de la heroína que llegan a EE UU provienen de Colombia. En 1998 los cultivos de coca en Colombia crecieron un 28%, según la DEA, frente a una disminución del 26% en Perú y un 17% en Bolivia. La producción de hoja supera el 50% del total mundial y las exportaciones de cocaína alcanzan el 75% (unas 165 toneladas en 1998). Colombia también es el cuarto productor mundial de heroína, sólo superado por Afganistán, Myanmar y Laos, y el segundo de marihuana. Las exportaciones colombianas de drogas ilegales en 1998 llegaron a 16.000 millones de dólares (aunque gran parte del dinero se queda en los países consumidores), superiores a los 11.000 millones de todas las exportaciones legales (carbón, petróleo, café, plátanos...). Hoy ya no dominan los dos grandes cárteles de Cali y Medellín, pues existen entre 80 y 250 bandas de narcotraficantes muy profesionalizados.

Los cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana han destruido cerca de 300.000 hectáreas de bosque en los diferentes pisos térmicos en los que se cultiva (la ganadería tiene un impacto mucho mayor, pues se extiende por cerca de 18 millones de hectáreas). Pero el impacto ambiental no se limita a la deforestación. Los cultivos ilícitos, precisamente por su rentabilidad, emplean grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes. Por cada hectárea de coca se vierten al agua dos toneladas de ácido sulfúrico, queroseno, amoníaco y permanganato de potasio. Indirectamente, el dinero de la droga contribuye a la deforestación, con la compra de tierras por narcos y su conversión en pastos para el ganado, la llamada *potrerización*.

Todo el esfuerzo estadounidense ha ido dirigido contra la *narcoguerrilla* y los grandes cárteles de la droga, e incluso se ha barajado la posibilidad de una intervención exterior en Colombia, como puso de manifiesto la visita a Colombia del zar antidrogas Barry McCaffrey, olvidando o haciendo la vista gorda ante la estrecha relación del narcotráfico con los paramilitares y amplios sectores del ejército. Los paramilitares han estado produciendo grandes cantidades de heroína en su cuartel general, en El Nudo de Paramillo y su jefe, Carlos Castaño, no sólo protege a narcotraficantes sino que además él mismo es un gran narcotraficante. En agosto de 1999 los paramilitares asesinaron a 250 civiles y obligaron a otros 5.000 a

huir en el Norte de Santander, en una ofensiva destinada a controlar la producción de coca; tras ocupar la zona, los paramilitares asesinan a quien no venda la cocaína a través de sus canales. ¿Pondrá la administración norteamericana el mismo celo en combatir a los *narcoparamilitares* que a la que ellos llaman narcoguerrilla?

La política de EE UU, y en menor medida de la Unión Europea, de combatir sólo la oferta, olvidando que toda demanda—*su demanda*—crea su oferta, y negándose a cualquier intento de legalizar de forma controlada el consumo de drogas, a la larga lo único que hace es agravar el problema del narcotráfico, que no existiría si no hubiese demanda en EE UU y Europa o si las drogas fuesen legalizadas. El narcotráfico explica parcialmente la virulencia y la persistencia de la violencia en Colombia, pues con sus rentas se financian las guerrillas a través de los impuestos que cobran, y sobre todo los paramilitares y una parte de la oficialidad del ejército, junto a una amplia delincuencia común. Las drogas, aunque suponen unos importantes ingresos inmediatos para el país, a la larga propician la violencia que impide el propio desarrollo económico y social, y sus costes son muy superiores a los beneficios que traería la paz.

¿Y cómo combate EE UU la oferta? Hoy presiona a Colombia para que use el glifosato (N-(fosfonometil)glicina), un herbicida muy tóxico que se emplea para la fumigación. Hay ya más de 40.000 hectáreas sembradas de amapola (*Papaver somniferum*) en la zona andina colombiana, en alturas que casi siempre superan los 3.000 metros, y otras 110.000 hectáreas con *Erythroxylum coca*. El glifosato empleado para erradicar la amapola está causando un serio daño al frágil ecosistema del páramo y además su efectividad es muy escasa, al ser fumigadas las plantaciones desde gran altura, para evitar que las avionetas y helicópteros sean alcanzados por los guerrilleros de las FARC.

Aún peores en términos ambientales son las otras alternativas que estudia el gobierno de EE UU. El Departamento de Agricultura de EE UU pretende usar el hongo *Pleospora papaveracea* para controlar las plantaciones de amapola (*Papaver somniferum*) y el hongo *Fusarium oxysporum* para erradicar los cultivos de *Erythroxylum coca*. Si se llegan a liberar los hongos los efectos podrían ser impredecibles, afectando muy probablemente a otras plantas cultivadas. EE UU ejerce fuertes presiones sobre los países andinos para llevar a cabo experimentos sobre el terreno, fuera del laboratorio, algo que según los agricultores peruanos ya ha sucedido, habiéndose extendido el hongo a los cultivos de yuca, bananos y mandarinas.

Una hectárea de coca genera una renta de unos 2.500 dólares anuales, hasta veinte veces más que cualquier cultivo alternativo. Sólo con represión, fumigaciones con glifosato y liberación de hongos, no se acabará con los cultivos ilícitos.

José Santamarta es director de la edición en castellano de la revista *World Watch*.